



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA:	IMPEDIMENTO
DEMANDANTE:	LUZ MARIA MOSQUERA PALACIOS
DEMANDADO:	CONJUNTO SIEMPRE VERDE P.H.
RADICADO:	050013105 019 2023 00338 01
ACTA No	74

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín conformada por las Magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a resolver el IMPEDIMENTO interpuesto por la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín en el proceso promovido por **LUZ MARÍA MOSQUERA PALACIOS** en contra del **CONJUNTO SIEMPRE VERDE P.H..**

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 74** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

Recibido el expediente por la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín¹ decidió declararse impedida para su conocimiento al considerarse inmersa en la causal del **numeral 6 del artículo 141 del CGP**, en tanto, verificó que quien actúa como apoderado judicial de la parte demandante, el abogado GABRIEL JAIME RODRIGUEZ ORTIZ, es el mismo apoderado que representa los intereses de su cónyuge en un proceso que se adelanta en el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín desde el año 2016.

Remitió las diligencias al Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, quien por auto del pasado **5 de septiembre**² reenvió el proceso a esta instancia³ al no aceptar los argumentos de su homóloga, señalando que de acuerdo a una providencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral de este Tribunal el impedimento es infundado, toda vez que no se identifica la existencia de un pleito pendiente que condicione la

¹ Primera instancia – Archivo 03 -

² Primera instancia – Archivo 06 -

³ **ARTÍCULO 140. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS.** Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumirá su conocimiento. **En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva. (...)**"

resolución del asunto que debe conocer la Juez, entre el cónyuge de quien se declara impedida y el apoderado de la parte demandante. Además, el hecho de que el abogado GABRIEL JAIME RODRIGUEZ ORTIZ defienda los intereses de su cónyuge en otro proceso judicial no es un motivo para que la imparcialidad se vea comprometida.

DETERMINACIÓN LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN ESTA INSTANCIA

Tras analizar los argumentos esbozados por los Jueces Dieciocho y Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el análisis en esta instancia se contrae a determinar si debe aceptarse el impedimento consagrado en el numeral 6 del artículo 141 del CGP.

2. CONSIDERACIONES

El artículo 140 del Código General del Proceso establece que *“los magistrados, jueces, con jueces en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta”*.

Así, el funcionario que estime comprometida su objetividad puede exteriorizar las razones de tal situación en aras de no tomar parte en el respectivo decurso, garantizando que este sea definido con el equilibrio debido y no se vea afectado por factores que resultan incompatibles con la rectitud en la administración de justicia, como son el afecto, el interés, los sentimientos de animadversión o el amor propio del fallador.

En el auto **AC537-2022**, se razonó de este modo:

(...) la toma de decisiones encaminada a solucionar los conflictos sometidos a composición de los jueces debe estar inspirada en los principios de imparcialidad y transparencia que le son propios, sin que haya lugar a sombra o duda sobre los móviles que inciden en su producción, por lo que, la declaración de impedimento, se constituye en un mecanismo que le permite al juzgador declararse separado del conocimiento de un determinado asunto, cuando atendidas las condiciones subjetivas del fallador, no es posible asegurar la imparcialidad y el ánimo sereno con el que debe concurrir a decidirlo”

En principio, tal separación sólo podrá darse en aquellos casos en los cuales, con criterio taxativo, ha establecido el legislador, podría verse comprometida la imparcialidad y el ánimo sereno con el que debe acudir a dirimir el pleito puesto a su consideración. Sobre el particular en la providencia **AC3224-2022** la Alta Corporación expresó:

“En esta materia rige el principio de taxatividad, según el cual sólo constituye motivo de excusa o de recusación, aquel que de manera expresa esté señalado en la ley, por tanto, a los jueces les está vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales, mientras que a los sujetos procesales no les está permitido escoger a su arbitrio a su juzgador, de modo que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial, no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garantía en punto de la independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del juez”.

Concretamente, en relación con la procedencia del impedimento basado en la causal **6ª del artículo 141 del CGP** referida a existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado, la Sala Primera de Decisión Laboral de este Tribunal efectuó un pronunciamiento en un asunto de similares características al aquí debatido, razonando de la siguiente manera:

Bien. Analizada la causal de impedimento propuesta por la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, la Sala la considera infundada al no existir justificación alguna para ello; la causal de recusación mencionada, i) no se configura en este caso, puesto que no se identifica la existencia de un pleito pendiente, que condicione la resolución del asunto que debe conocer la Juez, entre el cónyuge de quien se declara impedida y el apoderado de la parte demandante, considerando la Sala el carácter taxativo y la interpretación restringida de los impedimentos; ii) que el Dr. Gabriel Jaime Rodríguez Ortiz defienda los intereses de la Sra. Eliana María Casas Rivas –en este proceso ordinario laboral-, y del cónyuge de la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín –en otro proceso judicial-, no es un motivo para que la imparcialidad de la juez se vea comprometida.

En la decisión se cita la sentencia **C – 496 de 2016**, de la que esta Sala extrae:

“La jurisprudencia constitucional le ha reconocido a **la noción de imparcialidad, una doble dimensión: (i) subjetiva**, esto es, relacionada con “la probidad y la independencia del juez, de manera **que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales**, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto”; y **(ii) una dimensión objetiva**, “esto es, **sin contacto anterior con el thema decidendi**, “de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto”. No se pone con ella en duda la “rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucción” sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del proceso genera en el funcionario que lo adelanta, una afectación de ánimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea éste mismo quien lo juzgue.

(...) Ciertamente, la Constitución garantiza el derecho a la imparcialidad del juez (CP arts 29 y 228), pero esto no equivale a una configuración concreta y detallada de las causales de recusación e impedimento. Lo que exige este principio es que los sistemas de recusación e impedimento garanticen la imparcialidad judicial (...)

“(…) Pues bien, la posibilidad de recusar a un juez o conjuer por tener interés moral en la decisión, o el imperativo que dichos servidores tienen de declararse impedidos cuando concurra tal circunstancia, constituye una hipótesis de garantía de la imparcialidad judicial cuando no se presente ninguna otra causal de recusación o impedimento, y se configura cuando en quien está llamado ejercer jurisdicción pueda “acreditarse con absoluta claridad la afectación de su fuero interno, o en otras palabras, de su capacidad subjetiva para deliberar y fallar”.⁴ **En consecuencia, si bien el juez o conjuer que ha sido contraparte de una de las partes o de sus apoderados no puede ser recusado ni puede declararse impedido por ese solo hecho, eso no significa que entonces su situación sea inmune al principio constitucional de imparcialidad (CP art 29), pues en virtud de este último puede ser apartado del conocimiento del asunto si esa u otra circunstancia despiertan en él un interés moral en la actuación, que realmente afecte su fuero interno o capacidad subjetiva de fallar conforme a derecho, por el derecho mismo.**

Fuera de esos casos, es verdad que la sola circunstancia de ser o haber sido contraparte de una de las partes o de sus apoderados no constituye una causal objetiva de recusación en los Códigos General del Proceso y de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

⁴ Auto 080A de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil. Unánime). En esa ocasión se resolvía precisamente una recusación dirigida contra todos los magistrados de la Corte Constitucional, por supuestamente tener interés en la decisión, lo cual comprendía el cargo de supuesto interés moral en la misma.

Administrativo. En contraste, esa situación es causal aparentemente objetiva de recusación en los procesos regulados por el Código de Procedimiento Penal y el Código Disciplinario Único. Ahora bien, esa diferencia entre regulaciones, en los términos antes indicados, se puede explicar razonablemente en que esa sola circunstancia puede ser considerada por el legislador como indicador de falta de imparcialidad, pero no necesariamente tiene que configurarse como causa suficiente para el efecto. Cuando además de esa situación concurra otra; por ejemplo, enemistad grave o amistad íntima, pleito pendiente, interés moral, o el hecho objetivo de haber sido partes en el mismo proceso o denunciante en un proceso penal o disciplinario anterior o concomitante, cabe invocar estas últimas causales de recusación o impedimento expresamente previstas en la ley. **Sin embargo, cuando no concurre ninguna de estas otras hipótesis, y el juez o conjuer del caso fue contraparte de una de las partes o de sus apoderados, no se ve por qué haya de asumirse necesariamente su falta de imparcialidad.**

De hecho, aunque el Código de Procedimiento Penal, como lo señalan los actores, contempla expresamente esta causal de impedimento y recusación, lo cual parecería indicar que es de naturaleza objetiva, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en realidad no lo es **sino cuando esa situación se presenta en el mismo proceso en el que el juez está llamado a ejercer funciones jurisdiccionales. En contraste, cuando el juez o conjuer ha sido contraparte de las partes o de sus apoderados en un proceso diferente al que está en curso, la jurisprudencia exige demostrar, además de esa circunstancia, una afectación concreta a la imparcialidad judicial. Es decir, no basta con probar un hecho objetivo, sino que debe acreditarse una duda razonable de afectación subjetiva de quien encarna la autoridad jurisdiccional.** En efecto, al menos desde el auto del 4 de septiembre de 1998, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostiene que la causal de impedimento y recusación contra el juez por ser o haber sido contraparte de las partes o de sus apoderados "resulta atendible cuando en la misma actuación judicial se presente la circunstancia de que el fallador y uno de los sujetos procesales hayan sido contrapartes. **Pero, en tratándose de procesos diferentes, es menester que el funcionario que se declara impedido demuestre que, conforme a las circunstancias que cobijan la relación jurídico-procesal, su imparcialidad y objetividad se van a ver afectadas**".⁵ Esta posición se ha reiterado en múltiples ocasiones, y por eso por ejemplo en el auto del 9 de mayo de 2007 de la misma Corporación se dijo al respecto:

"...vale reiterar que la jurisprudencia de la Corte ha sido pacífica en torno al concepto de contraparte como motivo excusante para conocer del proceso, pues su alcance implica una doble perspectiva, a saber:

"a) Que dicha condición se predique en el mismo proceso, es decir, que el juez que debe resolver el asunto tenga al mismo tiempo la condición de adversario frente a cualquiera de los sujetos procesales.

"b) Que esa condición de adversario se presente en otro proceso, evento en el cual 'deberán examinarse las específicas circunstancias temporales y morales que caracterizan la relación jurídico procesal, y determinar **así la incidencia concreta que tal calidad pueda tener en la objetividad e imparcialidad del funcionario**'.⁶

⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 4 de septiembre de 1998 (MP Carlos E. Mejía Escobar). Radicado No. 14772.

⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 9 de mayo de 2007 (MP Jorge Luis Quintero Milanés). Radicado No. 22435. Reiterado luego, por ejemplo, en los autos del 11 de diciembre de 2007 (MP Yesid Ramírez Bastidas), radicado No. 28784; del 28 de julio de 2010 (MP Augusto J. Ibáñez Guzmán), radicado No. 34637; del 7 de junio de 2012 (MP Julio Enrique Socha Salamanca), radicado No. 39168; del 11 de febrero de 2014 (MP Fernando Alberto Castro Caballero), radicado No. 36784, entre otros. En todos estos casos, la Corte debía resolver impedimentos o recusaciones fundadas en la causal que los accionantes del presente proceso echan de menos. El Consejo de Estado, en materia de tutela en la cual se aplica el Código de Procedimiento Penal, también ha prohiado esta posición al resolver un caso similar, refiriéndose en forma expresa a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, por ejemplo en el auto del 12 de marzo de 2015, Sección Quinta (CP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez), Expediente: 11001-03-15-000-2014-01869-01.

Como se observa, en realidad, ni siquiera en el proceso regulado por el Código de Procedimiento Penal, en el que se consagra expresamente la causal de recusación e impedimento para jueces y conjuces por ser o haber sido contrapartes de las partes o sus apoderados, esa sola circunstancia es considerada como indicador suficiente de falta de imparcialidad judicial. No advierte la Sala Plena de esta Corporación razón alguna para dudar fundadamente de la imparcialidad de un juez civil o contencioso administrativo, **solo por el hecho de haber sido contraparte de las partes o de sus apoderados en procesos diferentes al que está en curso**, y con independencia de las circunstancias en que se hubiese desarrollado. La Corte no está entonces ante un caso en el cual la omisión cuestionada, entendida en sentido estricto, carezca de justificación suficiente. Tal omisión se justifica suficientemente en que esa circunstancia objetiva no es en cuanto tal un elemento que baste por sí mismo para demostrar, ausentes otras condiciones, falta de imparcialidad en el juez o conjuce de la causa. (...)"

(negritas fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, la garantía de imparcialidad debe analizarse desde dos puntos de vista: el subjetivo y el objetivo. En el caso planteado, no existe un elemento subjetivo ni objetivo que permitan inferir razonablemente que la imparcialidad y objetividad de la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín Dra. Alba Mery Jaramillo Mejía se vea expuesta para decidir el litigio.

Para aceptarse el impedimento es necesario que la togada exponga las razones por las cuales su imparcialidad y objetividad se van a ver afectadas, siendo claro que en este proceso su cónyuge no es el demandante, tampoco se afirma que la pasiva sea la misma del proceso de su pareja. En fin, la única aseveración que se hace para declararse impedida es que el abogado GABRIEL JAIME RODRIGUEZ ORTIZ es el mismo apoderado de su cónyuge, y ese simple hecho no permite colegir elementos que nos lleven a pensar que no habrá imparcialidad y objetividad en sus decisiones.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que lleva a la Sala a no aceptar el impedimento expresado, por lo que se ordenará remitir la actuación a la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: Declarar infundado el impedimento manifestado por la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Se ordena retornar la actuación al despacho del Juez Veintisiete Laboral del Circuito de Medellín.

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó
por estados No. 162 del 26 de septiembre
de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>